



SSRC

Conflict Prevention and Peace Forum

CPPF Reunión sobre Honduras New York, 18 de julio de 2012

Nota de la Reunión¹

El 18 de julio de 2012, el Conflict Prevention and Peace Forum organizó una reunión sobre Honduras en la cual participaron expertos, académicos y funcionarios de las Naciones Unidas. La reunión exploró los desafíos a los que se enfrentan al Estado y la sociedad hondureña con miras a las elecciones primarias en noviembre de este año y las elecciones legislativas y presidenciales del año entrante. Entre los temas discutidos durante la reunión, los expertos se enfocaron en la coyuntura política y los arreglos institucionales existentes en el país como resultado de la crisis del año 2009; los problemas de inseguridad y la influencia del crimen organizado en el contexto nacional y regional y las reformas necesarias para garantizar tanto la estabilidad del país como el mejoramiento de las realidades socio-económicas de la población hondureña.

Contexto Actual

Tres años después el golpe de Estado del 2009, un año desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación finalizó su reporte y recomendaciones y dos años y medio desde que el presidente Lobo asumió su mandato, el Estado hondureño se encuentra en un estado de extrema fragilidad y la inestabilidad política y los altos niveles de inseguridad y conflicto son amenazas para la gobernabilidad democrática. Encuestas recientes mostraron que 89% de los hondureños piensan que su país va “en mal camino”. Es en este contexto que el país se prepara para las elecciones primarias que se realizarán en cuatro meses y que determinarán los candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre de 2013.

Hubo consenso entre los expertos en que Honduras se enfrenta a una “crisis de Estado y de ciudadanía”, ya que el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de resolver los problemas a los que se enfrenta la población, lo que ha resultado en que la ciudadanía tenga muy poca credibilidad en las instituciones estatales y la política como un medio para resolver conflictos y responder a sus necesidades. Los problemas estructurales y la debilidad de las instituciones han llevado al país a niveles de inequidad nunca antes vistos, mientras que la pobreza continúa aumentando: en el 2011 la incidencia de pobreza por hogares era del 60 por ciento y el índice GINI en el país de 56.95, que indica que Honduras es uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. En este mismo año, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de solamente 2.8 por ciento; y un experto anotó la necesidad de que Honduras invierta en educación e infraestructura para que pueda atraer inversionistas en áreas de producción que no sean solamente textiles y agricultura. Un analista afirmó que en los últimos seis meses ha habido 30 cambios en las leyes tributarias, lo cual no contribuye a crear un marco de estabilidad que facilite la inversión.

¹ Esta nota es un resumen de una rica y diversa discusión. No pretende ser un recuento textual, ni representar un consenso de opiniones.

Esto, aunado a la generalizada evasión de impuestos –incluso por parte de grandes compañías- y a fenómenos como la usura (con bancos que cobran tasas de interés de hasta 86 por ciento para tarjetas de crédito) dificulta el crecimiento económico del país. Las remesas de los migrantes, que llegan a ser según uno de los expertos 2850 millones de dólares anuales, han sido parte esencial de la economía hondureña, pero las dificultades económicas de Estados Unidos y Europa seguramente afectarán esta cifra en el futuro.

La crisis económica hondureña se ve afectada, aseguró un experto, por las malas condiciones económicas de los países vecinos, en particular Belice y el Triangulo Norte. El crecimiento del PBI en Guatemala fue del 3.9 por ciento, en Nicaragua del 4.7 por ciento, y en Belice del 2 por ciento, por debajo del 5 por ciento en toda la región. También, el porcentaje de la población que vive bajo el índice de la pobreza en la región continúa siendo extremadamente alto: el 54 por ciento en Guatemala, el 46.2 por ciento en Nicaragua y el 43 por ciento en Belice.

Según uno de los participantes, la clase política ha demostrado su falta de ideas con respecto a la dirección que debería tomar el país y ha fallado en el intento de presentar soluciones concretas y viables para solucionar los problemas de pobreza e inequidad de Honduras. Es más, varios de los participantes afirmaron que la clase política se ha esforzado por mantener las estructuras de poder existentes, sin importar el impacto negativo que éstas tienen en la democracia, ya que les ha garantizado continuar con cercano control del poder. Uno de los presentes llegó a preguntar “¿hay estado en Honduras?”, y varios participantes afirmaron que el mayor obstáculo para la gobernabilidad democrática en Honduras son los poderes fácticos. Estos controlan no sólo la economía del país y perpetúan estructuras socio-económicas que les dan grandes privilegios, a la vez que tienen bajo su control a los medios de comunicación y hasta determinadas entidades estatales, en lo que fue descrito como una “apropiación casi privada de los espacios del Estado”. En palabras de uno de los expertos, el Estado hondureño puede ser descrito como un “Estado espectador” por su ineficiencia y debilidad. En ese sentido, varios de los expertos hondureños relataron como miembros de la élite del país se refieren a determinados jueces o congresistas como “suyos”, reconociendo así que en muchos casos los intereses privados prevalecen sobre el bien público. Uno de los asistentes explicó que este escenario se complica aún más dado el carácter mercantilista de los sindicatos que han militado tradicionalmente con la izquierda, y dónde también hay altos niveles de corrupción. El golpe de Estado del 2009, se dijo, es un buen ejemplo de las debilidades institucionales que existen en Honduras; este evento fue descrito como una crisis institucional producto de la imposibilidad de las élites de resolver una disputa política.

Con esto en mente, algunos de los expertos señalaron la necesidad de convocar a un gran acuerdo nacional, donde la clase política, el sector privado, y la sociedad civil puedan ponerse de acuerdo alrededor de una visión de futuro para el país, y “destrabar” las dinámicas políticas existentes. Otros expertos, en contraste, señalaron que un gran acuerdo sería difícil de lograr dadas las diferencias y fragmentaciones políticas que existen en el país. En cambio, propusieron hacer lo que llamaron “acuerdos mínimos” que permitan establecer planes de acción determinados sobre áreas específicas, tal como seguridad o educación. Estos planes tendrían que convocar a todos los sectores políticos, la sociedad civil y el sector privado, y buscarían crear un ambiente de pluralismo en el diseño de la agenda política. Varios participantes, sin embargo, señalaron que en Honduras ha habido muchos de estos pactos y acuerdos que simplemente se firman por razones políticas y no son implementados; en parte por la dificultad de que haya continuidad en las políticas públicas

por parte de los diferentes gobiernos. Es por ello importante que la ciudadanía se concientice sobre el papel que debe jugar para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Uno de los participantes hizo énfasis en el papel que las diferentes iglesias pueden jugar en convocar a la sociedad civil en un acuerdo de este tipo, dado que tienen una fuerte presencia dentro de las comunidades a lo largo del territorio y esto ayudaría a garantizar una participación de la población a nivel nacional y no sólo en Tegucigalpa. Igualmente debería involucrarse en un esfuerzo de este tipo a universidades públicas y privadas, y hacer uso de la academia cómo una opción orgánica para darle contenido a los acuerdos políticos. Si llegara a darse alguno de estos acuerdos nacionales, varios de los participantes afirmaron que la comunidad internacional, y en particular **las Naciones Unidas, deberían jugar un rol importante en facilitar el diálogo y crear un espacio plural donde todos los actores de la sociedad hondureña tengan la posibilidad de hacer parte de la conversación.**

Seguridad y crimen organizado

Una de las mayores amenazas a la estabilidad de Honduras es el incremento de la violencia, que ha llevado a este país a tener la tasa de homicidio más alta del mundo. En el año 2002 se registraron 56 homicidios por cada 100,000 habitantes y hubo 86 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2011; es decir, hubo un incremento de 186.25 por ciento en un periodo de 7 años. Esto ha resultado en que los costos de seguridad absorben el 9.6 por ciento del PIB. Varios expertos han apuntado a la extensiva presencia del narcotráfico y el crimen organizado en su territorio como una de las razones de estas altas tasas de asesinatos. Este fenómeno ha estado presente en Honduras desde los años 70, y según uno de los expertos, siempre ha estado cercanamente vinculado con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A diferencia de otros países vecinos tales como El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, donde el narcotráfico ha utilizado las redes de grupos insurgentes y paramilitares que no fueron desmanteladas después del final de las guerras, en Honduras las fuerzas de seguridad públicas han sido centrales en la expansión de este fenómeno. Los presentes en la reunión buscaron explicar por qué, si el narcotráfico ha estado presente en Honduras por cuatro décadas, sólo recientemente han aumentado los índices de violencia asociados con esta actividad. Una de las posibles explicaciones es la inserción y dominio del grupo de narcotraficantes mexicanos Los Zetas en la región. Los Zetas, a diferencia de otros carteles, buscan control territorial donde ejercer su dominio y llevar a cabo diferentes tipos de actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas pero también la prostitución, la extorción, y el tráfico de armas. Otra particularidad del fenómeno de los Zetas, es que estos suelen pagar en “especie”, lo cual deja una importante cantidad de droga en el mercado local y lleva a una violencia domestica en el intento de lograr dominar este mercado.

El tráfico de drogas en Honduras también juega un importante papel en la economía local, que dada su rentabilidad ha convertido a los narcotraficantes en un grupo fáctico de poder muy importante, con altos niveles de infiltración y control político. En un país con tan altos niveles de pobreza y desempleo, aunado con la impunidad y tolerancia que existe por parte de las instituciones estatales hacia estas actividades ilícitas, el narcotráfico ha logrado infiltrar múltiples áreas del Estado y la sociedad. Es más, el narcotráfico no es solamente una fuente de empleo sino una subcultura que provee un estilo de vida que atrae a los jóvenes. Se explicó también que la respuesta del Estado a este problema ha sido caótica y descoordinada, lo que ha convertido a Honduras en una “fuente de amenaza a la seguridad regional”. Por ahora, Honduras trabaja bilateralmente con Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y a cambio el país recibe del gobierno americano apoyo militar y

de inteligencia. A pesar de esta cooperación, la ausencia de enjuiciamiento por parte del Estado de altas figuras involucradas con el narcotráfico ha dado la impresión, errónea según un asistente, de que este fenómeno está sólo presente dentro de los sectores más pobres del país, lo cual no sólo es falso sino que ayuda a perpetuar la impunidad.

Se discutió también en la reunión cómo ha sido recibida en Honduras la propuesta de repensar si el régimen de control de drogas existente es la manera idónea de lidiar con este problema, como lo han dicho varios mandatarios y ex presidentes de la región, entre ellos Otto Pérez, de la vecina Guatemala. Según uno de los presentes, esta propuesta perdió impacto político en la región pues "cayó en medio de una lucha de hegemonías en el SICA". A pesar de esto, varios de los participantes afirmaron que se necesita expandir el debate sobre el tráfico de drogas y diversificar las estrategias utilizadas para combatir el narcotráfico.

Además de la amenaza del narcotráfico, los hondureños se ven afectados día a día por la violencia de las maras y otros grupos criminales organizados, así como por el crimen común. Hay dos elementos institucionales que complican el panorama de violencia e inseguridad en Honduras: de una parte, el Estado no tiene la capacidad de controlar el territorio nacional para prevenir la propagación del crimen organizado y el narcotráfico; su sistema judicial es ineficiente y débil, y el sistema carcelario está en una profunda crisis. De otra parte, hay altos niveles de corrupción entre las fuerzas del orden público, en particular la policía, lo cual hace que los ciudadanos no reporten los crímenes y que se incite la tendencia a resolver conflictos por la vía privada. Los expertos también señalaron dos temas que han ayudado al incremento en los niveles de inseguridad: de un lado, el involucramiento de las maras en el crimen organizado, y del otro, la deportación de alrededor de 600 personas de los Estados Unidos cada semana. Muchos de estos deportados tienen antecedentes penales y están conectados con maras u otro tipo de organizaciones criminales. Los expertos en la reunión discutieron los resultados de las negociaciones que el gobierno del presidente Mauricio Funes en El Salvador ha desarrollado con las maras de ese país, y que han bajado dramáticamente las tasas de homicidio. Un experto explicó que esos números pueden estar distorsionados por la existencia de cementerios clandestinos, y otros calificaron estas negociaciones como "perversas" e insostenibles. Otros, sin embargo, defendieron la estrategia como una medida que ha transformado radicalmente la calidad de vida de los salvadoreños, y aunque aceptaron que es difícil saber si es sostenible, propusieron que Honduras estudie este modelo.

Se recalcó durante la discusión de la reforma del sistema de seguridad los problemas que existen con el cuerpo policial. Uno de los panelistas dijo: "en mi país [la policía] no es parte de solución ni parte del problema, [la policía] es el problema." Estas dificultades se remontan a la transición a la democracia en los años ochenta, cuando la Policía Nacional fue separada del Ejército; pero en vez de reclutar nuevos agentes, simplemente se transfirieron los miembros existentes al nuevo cuerpo. Esto resultó en la permanencia de las alianzas y lealtades existentes bajo las estructuras anteriores, fomentando una cultura de corrupción que ha llevado a la acusación de vínculos entre la policía y las maras. Uno de los expertos señaló que dadas las circunstancias bajo las cuales la policía debe operar, con falta de equipos, personal, administración, sueldos bajísimos y falta de beneficios, es sólo natural que haya una policía corrupta. Un analista trajo a colación el ejemplo colombiano de cómo se fueron paulatinamente mejorando las condiciones de trabajo y depurando a la policía hasta que sus niveles de aprobación y eficiencia mejoraron notablemente. Por lo tanto, los expertos expresaron su apoyo a los procesos de depuración que se han ido

llevando a cabo en la policía hondureña, enfatizando la necesidad de incluir a la cúpula en esta limpieza, y señalando que ésta debe llevarse a cabo simultáneamente con la reforma integral de todos los órganos de seguridad.

Varios expertos anotaron que resolver los problemas de funcionamiento de la Fiscalía es una tarea central a la hora de mejorar el sistema de justicia en Honduras. La rama de la fiscalía encargada de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, no ha investigado ninguno de los 2447 casos de manejos sospechosos e irregulares de dinero que han sido traídos a su atención. Este ejemplo, según uno de los participantes, indica cómo en Honduras “hay investigaciones que no se hacen por conveniencia política; investigaciones que se hacen mal para que sean declaradas nulas judicialmente, e investigaciones que se hacen simplemente para perjudicar a individuos”. Igualmente, hay gran preocupación por el alto número de asesinatos de periodistas, que han hecho que Honduras sea uno de los países donde es más peligroso ejercer esta profesión.

Aunque las Fuerzas Militares tienen menos índices de corrupción que la policía, varios de los presentes expresaron preocupación por el papel que éstas jugaron en la manera cómo el ex presidente Zelaya fue sacado del país, y enfatizaron la importancia de garantizar que los estamentos militares se mantengan bajo el control del mando civil. Varios expertos anotaron que la ampliación del papel jugado por los militares viene desde el gobierno de Zelaya, quien les dobló su presupuesto, y ha continuado en los gobiernos después del golpe. En ese sentido, uno de los expertos anotó como “los militares están pasando la factura por su papel en el golpe”, ya que varios miembros del estamento militar han recibido altos cargos de poder. Existe preocupación que se esté deshaciendo el progreso que en ese sentido se había venido lentamente logrando desde la transición a la democracia en 1981.

Dada la gravedad de la crisis del sistema de seguridad en general, el gobierno del presidente Lobo aprobó en enero de 2012 la creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad para efectuar un análisis del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El análisis de esta comisión tomará en cuenta a los organismos del Estado que directa e indirectamente atienden problemas que contribuyen a la seguridad; estudiando la estructura, recursos humanos, modelo de gestión, marco normativo, legitimidad social, los resultados de la gestión y como estos organismos se relacionan e interactúan entre ellos. El objetivo de esta Comisión es poder contribuir al desarrollo de un sistema de seguridad ciudadana que cuente con las capacidades y condiciones adecuadas para mejor cumplir las funciones básicas de seguridad del Estado e impulsar la depuración del sistema de seguridad de Honduras. La existencia de la Comisión ha sido vista favorablemente por amplios sectores de la sociedad hondureña, y en palabras de uno de los expertos presentes en el evento, uno de los esfuerzos más importantes en la historia de Honduras de fortalecer la independencia de las instituciones y deshacer el fuerte control de los poderes fácticos sobre las mismas.

Uno de los panelistas recalcó que bien si la reforma del sistema de seguridad es oportuna y necesaria, es importante reconocer que para que esta se materialice se necesita voluntad política. Además de darle a la reforma los “dientes necesarios”, varios expertos alertaron sobre la posibilidad de que ésta se enrede en los debates partidistas que usualmente terminan abrumando el interés nacional en debates de esta naturaleza. Igualmente importante es garantizar que la reforma tenga el financiamiento necesario. Mientras que un participante explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco

Mundial han dado préstamos para que se inicien estas reformas, otro anotó que es importante que Honduras encuentre una manera de incorporar los costos del sistema de seguridad en el presupuesto normal, pues una reforma de largo plazo como ésta necesitará financiación “regular” por muchos años.

Algunos participantes recalcaron la necesidad de implementar medidas a corto y mediano plazo, que se empiecen a desarrollar antes de que la Comisión presente sus resultados finales en tres años. Se afirmó que dado que la Comisión ha generado esperanza en el pueblo hondureño y es vista por muchos como una instancia neutral que puede llevar a un progreso real en un área de gran prioridad, es importante que los hondureños vean resultados en el corto y mediano plazo. Con esto en mente, uno de los expertos afirmó que es importante combinar medidas de prevención y represión de la violencia y el delito, y trabajar de manera multifacética para lograr mejores resultados. En esta área, la comunidad internacional podría presentar un apoyo importante al gobierno hondureño, brindando no solo financiamiento sino también apoyo técnico.

Los participantes en la reunión debatieron si se debe dar respuesta a los problemas de seguridad y crimen organizado que enfrentan a Honduras desde el ámbito regional o internacional, o si las respuestas deben ser esencialmente nacionales. De un lado, varios expertos anotaron que las dinámicas del crimen organizado están fuertemente influenciadas por lo que pasa tanto en los países productores en los Andes como en otras rutas de tráfico tal como el Caribe u otros países del istmo, e hicieron referencia al llamado “efecto cucaracha”. Por ello, afirmaron, una respuesta eficiente a estos problemas sólo puede ser diseñada en un contexto regional, por lo menos para el Triangulo Norte. Otros, sin embargo, anotaron que las arquitecturas regionales tales como el SICA han demostrado ser ampliamente ineficientes, lo que se ha complicado aun más dada la poca afinidad que hay entre los actuales mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Por ello, argumentaron, es más útil y eficaz diseñar una estrategia de los hondureños y para los hondureños, pues tendrá más legitimidad y será de más fácil implementación.

En el área de seguridad, las Naciones Unidas puede jugar un rol importante al proveer apoyo técnico y financiero, particularmente con respecto a las reformas necesarias en este ámbito. La asistencia técnica que la comunidad internacional puede dar al proceso de depuración del cuerpo policial puede ser esencial para garantizar que este se lleve a cabo de manera eficaz y a través de procesos idóneos. Asimismo, la comunidad internacional puede facilitar las reformas necesarias a corto y mediano plazo mientras que la Comisión termina su reporte.

Escenario electoral

La campaña electoral que precede a elecciones de finales de este año se desarrolla en un contexto marcado por dos grandes cambios: uno, el final de la hegemonía del bipartidismo, y dos, una coyuntura política fuertemente determinada por la manera como el ex presidente Zelaya salió del poder. Los expertos afirmaron que la crisis del 2009 fue resultado de la debilidad de las instituciones hondureñas y la falta de voluntad política de lograr un acuerdo que hubiera podido evitar la salida forzada de Zelaya del poder. El golpe tuvo varias consecuencias políticas que aún tienen repercusiones: primero, el gobierno de facto abiertamente violó los derechos humanos de muchos hondureños, y limitó las libertades de los ciudadanos. Adicionalmente, Honduras debió enfrentar el corte abrupto del apoyo

económico internacional, lo cual impactó la habilidad del gobierno de proveer a la población los servicios necesarios. Aunque Honduras ha regresado a su estatus anterior dentro de la comunidad internacional y el nuevo mandatario es reconocido internacionalmente como legítimo, el impacto de estos hechos aún se siente en múltiples esferas.

Quizás la consecuencia más inesperada de la crisis es la diversificación del panorama electoral hondureño, ya que para las elecciones del 2013 se introducen al proceso electoral cuatro nuevos partidos: el Partido Anticorrupción (PAC) liderado por Salvador Nasralla; el partido Libertad y Refundación (LIBRE) liderado por el Presidente Zelaya; el partido Alianza Patriótica (Alianza) liderado por el general Romeo Vásquez Velásquez; y el partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER) liderado por Andrés Pavón. La introducción de estos nuevos partidos presenta la oportunidad de nuevos espacios políticos y de representación. Uno de los expertos señaló que bien si esta apertura crea una incertidumbre en el futuro político del país, “el pluralismo siempre es bueno para la democracia.” Otro de los expertos se mostró menos optimista, señalando que si las nuevas fuerzas políticas logran acaparar un gran porcentaje del electorado resultaría en una dinámica muy complicada en el Congreso, y describió dos posibles escenarios: uno, un Congreso fraccionado que fuerza a los políticos a llegar a acuerdos para poder gobernar; o dos, un legislativo dividido y paralizado por las diferencias políticas. Algunos de los presentes ven en los rumores de que Manuel Zelaya ya está discutiendo con Yani Rosenthal del Partido Liberal para formar una alianza mayoritaria en el Congreso Nacional una indicación de que en Honduras “todo es negociable”. En todo caso, es preocupante la falta de contenido ideológico de las plataformas programáticas de los partidos, y las tenues afiliaciones partidistas de los ciudadanos más allá de los lazos clientelares. Algunos de los presentes afirmaron que los partidos políticos aún no han pagado el costo electoral de su ineficiencia, en parte porque no hay una agenda ciudadana que haga que esto pase. En ese sentido, a lo largo de la reunión se repitió la necesidad de que la sociedad civil hondureña recupere su capacidad propositiva y se convierta en un actor que lidere a la hora de establecer la agenda política.

Los expertos mostraron su preocupación por la posibilidad de que los fondos de las campañas presidenciales y electorales sean infiltrados por dineros provenientes del crimen organizado o el narcotráfico. Esto es muy factible, se argumentó, ya que hay claros indicios de que dineros ilícitos han infiltrado a industrias, comercio y la banca. Supervisar y detectar fondos ilícitos en campañas electorales es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá trabajar con el sistema financiero para monitorear los movimientos de fondos y rastrear el origen de éstos. Sin embargo, los expertos aseguraron que el TSE no tiene ni la capacidad ni los recursos para asegurar que el dinero del crimen organizado no penetre el proceso electoral, y fue sugerido que si no hay una rigurosa supervisión las probabilidades de una elección fraudulenta es extremadamente alta, usando mecanismos tales como la manipulación del censo electoral y los falsos traslados de domicilio. **Por lo tanto, los expertos señalaron que la cooperación y supervisión de la comunidad internacional será esencial en los próximos 16 meses. Uno de los expertos señaló que es indispensable que la comunidad internacional comience a supervisar la campaña electoral desde ya, enviando monitores que puedan asistir al TSE y garantizar un proceso libre de fraude.** Naturalmente, esfuerzos de esta naturaleza tienen que contar con apoyo político: en el pasado, por ejemplo, en Congreso rechazó el paquete de reformas al sistema electoral producto de una larga colaboración técnica entre las Naciones Unidas y el TSE.

La agenda inconclusa

Los expertos señalaron que si bien es improbable que ocurra otro episodio de rompimiento institucional violento como el que ocurrió en el año 2009, sí existe la posibilidad de que surja una crisis institucional y constitucional de importantes dimensiones. Algunos indicios preocupantes son, por ejemplo, las discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso sobre las posibles formas de fortalecer al poder legislativo, tales como desaforar a la Corte Suprema para impedir que ésta falle en contra de los intereses del Congreso. Este tipo de medidas, se alertó, sólo resultarán en aún más desencanto de la población hondureña con la política, y agravan la crisis de gobernabilidad democrática del país.

Varios de los presentes anotaron cómo sólo 13 de las 88 recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación han sido implementadas hasta ahora. Particularmente grave es la falta de investigaciones de asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos, cuya incidencia subió radicalmente inmediatamente después del golpe militar y durante el actual gobierno, ya que la voluntad política de algunos funcionarios – tales como la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda- no es suficiente para contrarrestar la enorme oposición política a la que se ha enfrentado.

Uno de los grandes temas pendientes es la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Varios expertos hicieron énfasis en la importancia de que, además de promover la idea de una asamblea, se cree un proyecto constitucional que le de contenido a esta propuesta. Afirmaron también que gran parte de la población apoyaba la idea de “la cuarta urna” promovida por el ex presidente Zelaya no porque entendieran el propósito o los objetivos de la asamblea, sino porque parecía una salida política que podría hacer que las cosas mejoraran. Uno de los expertos citó a un ciudadano hondureño que explicaba su apoyo diciendo “la cuarta urna es un tipo de arca de Noé: o me subo o me ahogo.” Aunque en la reunión se mencionaron varias disposiciones y vacíos constitucionales que es importante que sean cambiados (tales como los mecanismos de reforma constitucional), uno de los expertos señaló que una constituyente no es necesaria, ya que un 98 por ciento de la constitución puede ser modificada, solo existen un limitado número de artículos que no pueden ser modificados por vías legislativas, tales como el periodo y la reelección presidencial. También se afirmó que convocar una asamblea constituyente trae grandes riesgos políticos, pues una vez en sesión es difícil predecir que dinámicas ésta tomará y cuál será el resultado. Algunos de los presentes, sin embargos, dijeron que si hay un debate sustancial y de contenido, una asamblea constituyente puede ser muy beneficiosa para el país.

Otro tema que será de gran importancia en el futuro cercano es el conflicto que se está dando en el sector agrario, dado que el tema de tenencia de tierra ha sido forzado en la agenda política por la violencia que se ha dado en el Bajo Aguán. Los grandes intereses económicos interesados en mantener la estructura de tierras como está, y la posibilidad de que haya un movimiento campesino de mayor envergadura que se esté formando, puede resultar en mayores niveles de conflictividad en el futuro.

Los expertos presentes en la reunión resaltaron la importancia que tendrá tanto la cooperación internacional en el ámbito económico como la colaboración política que venga de la comunidad internacional para que Honduras pueda empezar a enfrentar los retos descritos. En ese sentido, es muy importante que los países donantes logren coordinar cercanamente sus proyectos para que no

haya repeticiones y contradicciones como las que hoy existen. Uno de los expertos anotó que los hondureños han tenido la esperanza que los momentos de quiebre en su historia resulten en una oportunidad para que el país sufra una transformación radical: esa era la esperanza después de que el país se viera azotado por el huracán Mitch; eso se pensó cuando Honduras logró el alivio de la deuda externa; y más recientemente con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Aunque estos tres años no han llevado a una transformación radical, varios de los presentes señalaron a la Comisión de Reforma a la Seguridad como un primer espacio donde reformas de gran importancia pueden empezar a gestarse. El papel que la comunidad internacional puede y debe tener en apoyar este tipo de esfuerzos será de gran importancia para que Honduras pueda conseguir sus metas en desarrollo y gobernabilidad democrática.

New York, Julio de 2012